

# PGR

---

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

DÉCIMA SEXTA

SESIÓN ORDINARIA 2018

---

**Sesión: DÉCIMA SEXTA  
ORDINARIA**

---

**Fecha:** 2 DE MAYO DE 2018

---

**Hora:** 12:00 horas.

---

**Lugar:** Ciudad de México  
Ignacio L. Vallarta No. 13,  
Col. Tabacalera, Cuauhtémoc  
Sala de Juntas, 8vo Piso

---

## ACTA DE SESIÓN

### INTEGRANTES

1. **Lcda. Adi Loza Barrera.**  
**Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.**  
En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).
2. **Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.**  
**Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Dependencia.**  
En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. **Lic. Luis Grijalva Torrero.**  
**Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República.** En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF., 9.V.2016).

A las doce horas con cuatro minutos del miércoles dos de mayo de dos mil dieciocho, en la sala de juntas del octavo piso del edificio ubicado en Calle Ignacio L. Vallarta, No. 13, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia verificó la asistencia de todos los integrantes de ese Órgano Colegiado, habiendo quórum legal suficiente para sesionar.

Del mismo modo, se encuentran presentes los enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas de los cuales queda evidencia con el registro autógrafo de su firma, en la lista de asistencia de la actual sesión.

### **DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS**

#### **I. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.**

#### **II. Aprobación de Acta de la sesión inmediata anterior.**

#### **III. Análisis y resolución de las solicitudes de información:**

##### **A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad:**

- A.1. Folio 0001700090118
- A.2. Folio 0001700090718
- A.3. Folio 0001700101018
- A.4. Folio 0001700103318
- A.5. Folio 0001700105318
- A.6. Folio 0001700109318
- A.7. Folio 0001700109418
- A.8. Folio 0001700116018
- A.9. Folio 0001700121018
- A.10. Folio 0001700124718
- A.11. Folio 0001700124818

##### **B. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:**

- B.1. Folio 0001700108718
- B.2. Folio 0001700108918
- B.3. Folio 0001700109018
- B.4. Folio 0001700109618
- B.5. Folio 0001700109818
- B.6. Folio 0001700110618
- B.7. Folio 0001700110818
- B.8. Folio 0001700110918
- B.9. Folio 0001700111218
- B.10. Folio 0001700111818
- B.11. Folio 0001700111918



- B.12. Folio 0001700112018  
B.13. Folio 0001700112118  
B.14. Folio 0001700112218  
B.15. Folio 0001700112318  
B.16. Folio 0001700112418  
B.17. Folio 0001700112518  
B.18. Folio 0001700112618  
B.19. Folio 0001700112718  
B.20. Folio 0001700112818  
B.21. Folio 0001700112918  
B.22. Folio 0001700113018  
B.23. Folio 0001700113118  
B.24. Folio 0001700113318  
B.25. Folio 1700100016418 – Agencia de Investigación Criminal

### C. Asuntos Generales.

[illegible]

## ABREVIATURAS

**PGR** – Procuraduría General de la República.

**OP** – Oficina del C. Procurador General de la República.

**SJAI** – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

**SCRPPA** – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

**SEIDO** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

**SEIDF** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

**SDHPDSC** – Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

**AIC** – Agencia de Investigación Criminal.

**OM** – Oficialía Mayor.

**CAIA** – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

**CGSP** – Coordinación General de Servicios Periciales.

**COPLADII** – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

**CENAPI** – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

**PFM** – Policía Federal Ministerial.

**FEADLE** – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

**FEPADE** – Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

**FEVIMTRA** – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

**UEAF** – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

**UTAG** – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

**DGCS** – Dirección General de Comunicación Social.

**DGALEYN** – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

**VG** – Visitaduría General.

**INAI** – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

**LFTAIP** – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**CFPP** – Código Federal de Procedimientos Penales

**CNPP** – Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.

## ACUERDOS

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 24 de abril de 2018.
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de información para su análisis y determinación:

**A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de la información requerida:**

**A.1. Folio 0001700090118**

**Contenido de la Solicitud:** *"Solicitud de información sobre la FEADLE.*

*Solicitud de información a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión .*

*Mediante la presente solicitud de acceso a la información pública, solicito a esta respetable Fiscalía, la siguiente información, solicitando que cada uno de los siguientes numerales se responda con apoyo de los cuadros presentados.*

*I.*

*1. ¿Cuál es el número de denuncias por periodistas y personas defensoras de derechos humanos que ha recibido la Fiscalía del año 2015 al 2017? Desagregado por hombre y mujer.*

*2015 2015 2016 2016 2017 2017*

*Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres*

*Periodistas*

*Defensores*

*2. ¿Cuál es el número de investigaciones iniciadas por delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos del año 2015 al 2017? Desagregado por hombre y mujer.*

*2015 2015 2016 2016 2017 2017*

*Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres*

*Periodistas*

*Defensores*

*3. ¿Cuál es el número de resoluciones de no inicio de investigación por delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos (vinculadas al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales) ha resuelto la Fiscalía del año 2015 al 2017? Desagregar en: i. No inicios de investigación, ii. No ejercicios de la acción penal, iii. Archivos temporales*

*2015 2016 2017*

*No inicios de*

*investigación*

*No ejercicios de*

*acción penal*

*Archivos temporales*

*4. ¿Cuál es el número de investigaciones de delitos cometidos contra periodistas y*

*personas defensoras que se han "judicializado" (presentado ante tribunales) del año 2015 al 2017?*

*2015 2016 2017*

*5. ¿Cuál es el número de delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras que se han llevado a procedimiento abreviado del año 2015 al 2017?*

*2015 2016 2017*

*6. ¿Cuál es el número de soluciones alternas que se han realizado respecto a delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos del año 2015 al 2017. Desagregar en: i. Acuerdos reparatorios; ii. Suspensión condicional del proceso a prueba.*

*2015 2016 2017*

*Acuerdos*

*reparatorios*

*Suspensión*

*condicional del*

*proceso a prueba.*

*7. ¿Cuál es el número de juicios orales que se han realizado respecto a delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos?*

*8. ¿Cuál es el número de sentencias condenatorias que se han obtenido respecto a delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos del año de 2015 al 2017?*

*9. ¿Cuál es el número de agresiones reportadas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos bajo protección del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas?*

*II.*

*1. ¿Cuál es el presupuesto total con el que cuenta esta Fiscalía? Desagregar por año. 2015 2016 2017*

*2. ¿Cuál es el presupuesto para investigación y enjuiciamiento de delitos que persigue esta Fiscalía?*

*2015 2016 2017*

*Investigación*

*Enjuiciamiento*

*3. ¿Cuál es el número total de personal contratado?*

*4. ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres del personal contratado?*

*5. ¿Cuántas plazas con perfil de puesto definido se tiene en la Fiscalía?*

*6. ¿Cuántas plazas sin perfil de puesto definido se tiene en la Fiscalía?*

*7. ¿Cuántos servidores cumplen con el perfil de puesto según su Curriculum Vitae?*

*8. ¿Cuál es el organigrama de esta Fiscalía?*

*9. ¿Cuál es el número de plazas que son comisionadas de otras unidades?*

*10. ¿Cuál es el número de plazas que han realizado exámenes del servicio profesional de carrera?*

*11. ¿Cuál es el número de plazas que son de libre designación?*

*12. ¿Se ha recibido capacitación en temas de género, no discriminación y derechos humanos (u otros) a los servidores públicos de esta Fiscalía del año 2015 al 2017?*

*Desagregar en: Tema de la capacitación, número de asistentes y horas de la capacitación.*

*13. ¿La Fiscalía cuenta con servicios de contención psicológica o estrategias para*



*atender fatiga emocional de su personal? Agregar los documentos que den contestación a lo solicitado.*

*Nota: agregar las versiones públicas de los documentos que den contestación a lo solicitado.” (Sic)*

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: COPLADII y SDHPDSC.**

**PGR/CT/ACDO/0279/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva adscrito a la del personal sustantivo Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de conformidad con lo establecido en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de dos años. Por lo que a fin de reforzar la citada clasificación, se emite la siguiente prueba de daño:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al divulgar la información solicitada, permitiría identificar el número de personal sustantivo, en específico Agentes del Ministerio Público de la Federación, propiciando la materialización de graves riesgos para dicho personal, en su vida, seguridad y salud, toda vez que al conocer el número total de personal sustantivo, en algún suceso podrían elementos de la delincuencia organizada superar en cantidad dichos elementos, haciéndolos susceptibles de posibles ataques, mediante acciones de violencia física, vulnerando así el desempeño de sus funciones dentro de esta Institución, y más importante aun vulnerando la vida de dicho personal.

En ese contexto, se ocasionaría un serio perjuicio en los derechos humanos antes mencionados, por lo que dicha difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados, de igual manera, al dar a conocer públicamente lo petitionado, podría ocasionar un detrimento en las funciones desempeñadas, causándose una obstrucción y menoscabo de dichas funciones.

- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que dar a conocer la información requerida, pondría en riesgo la vida, seguridad y salud de los servidores públicos, así como la de sus familiares, materializándose acciones en su contra que perjudiquen las labores inherentes a su cargo dentro de esta Procuraduría General de la República, institución cuya función principal consiste en la investigación y persecución de los delitos del orden federal.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio, este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio de los servidores públicos. En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible



de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de salvaguardar los derechos humanos referidos con antelación, y previstos en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva antes manifestada obedece a la obligación consistente en proteger la vida, seguridad y en su caso la salud de tales personas físicas en virtud de las funciones que realizan.

[illegible]

**A.2. Folio 0001700090718**

**Contenido de la Solicitud:**

*"POR ESTE MEDIO QUISIERA OBTENER EL DOMICILIO DE TODAS LAS CASAS DE SEGURIDAD QUE SE HAN ENCONTRADO A LO LARGO DEL PAÍS, EN TODAS LAS FECHAS QUE SE TENGA DISPONIBLE, YA QUE REQUIERO ESTA INFORMACIÓN OFICIAL COMO PARTE DE MI PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA MIS ESTUDIOS DE POSGRADO"* (Sic)

**Requerimiento de Información Adicional:**

*"Con Casas de Seguridad me refiero al "inmueble utilizado por organizaciones delictivas para ocultar personas secuestradas y/o mercancías ilícitas", de tal modo que con la mi petición quedaría de la siguiente forma:*

*POR ESTE MEDIO QUISIERA OBTENER EL DOMICILIO DE TODAS LAS CASAS DE SEGURIDAD, DONDE SE COMETIÓ EL DELITO DE SECUESTRO, QUE SE HAN ENCONTRADO A LO LARGO DEL PAÍS, EN TODAS LAS FECHAS QUE SE TENGA DISPONIBLE, YA QUE REQUIERO ESTA INFORMACIÓN OFICIAL COMO PARTE DE MI PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA MIS ESTUDIOS DE POSGRADO."*(Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a:** SDHPDSC, SEIDO, SCRPPA, CENAPI, DGCS y PFM.

**PGR/CT/ACDO/0280/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia, por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la información requerida; toda vez que actualiza la hipótesis de clasificación prevista en el artículo 110, fracción VII y 113, fracción I de la LFTAIP. Por lo que se robustece dicha clasificación aludida con la siguiente prueba de daño:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al hacer del dominio público la ubicación de domicilios en donde se llevan a cabo actos delictivos y que se encuentran en investigación, implicaría revelar los lugares que la delincuencia ha usado y en consecuencia podrían cambiar de estos lugares y con ello causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos, toda vez que se difundirían los actos de investigación realizados por parte del personal de esta Institución y con ello se pondría en riesgo tanto a los elementos policiacos como a las posibles víctimas, propiciando que miembros de la delincuencia organizada conozcan que la Institución ha detectado los domicilios que tienen para cometer actos ilícitos y con ello obstruir o evadir las técnicas y estrategias de investigación llevadas a cabo en la persecución de los delitos.
- II. Existe un riesgo de perjuicio, ya que publicitar dicha información, superaría el interés público de que se difunda, toda vez que atentaría directamente en las labores para el combate a la delincuencia, poniendo en peligro tanto las actividades de investigación

y persecución de los delitos como la seguridad de las personas. Por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad el que se garantice el derecho a la prevención y persecución de los delitos, sobre el interés particular de conocer la ubicación de domicilios relacionados con actos ilícitos.

- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, la reserva de la información se adecua al mismo, toda vez que se invoca con el propósito de evitar un perjuicio a la prevención y persecución de los delitos, a través de la protección de la información relacionada con domicilios relacionados a actos antijurídicos.

Asimismo, como ya se citó con antelación también se actualiza la causal de confidencialidad toda vez que en la petición solicitan un domicilio, y si bien no se detallan los nombres de los propietarios de dichos inmuebles, éstos se pueden obtener a través de un simple trámite ante el Registro Público de la Propiedad, y así materializarse el vínculo entre el dato personal solicitado y el titular del mismo, por lo que al ser un dato personal actualiza la confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

*TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
De la Información Confidencial*

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

- I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

...

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.*

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:

**TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:**

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**  
**II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y**  
**III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.**

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales. - - - - -

**A.3. Folio 0001700101018**

**Contenido de la Solicitud:**

"Solicito COPIA CERTIFICADA de la evaluación psicológica realizada el día martes 22 y miércoles 23 de marzo de 2016 a la suscrita C. (...), así como de toda la documentación y/o exámenes y/o tests y/o baterías siguientes: Test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender, Test de matrices Progresivas (Escala General) de j.c. Raven, Inventario de Evaluación de la personalidad (PAI), Inventario de Depresión Beck, de ch. D. Spielberger, Test de la figura humana de k.Machover, Test proyectivo de la casa-arbol-persona (HTP) de J.Buck, Test Proyectivo de la Persona bajo la lluvia de E. Hammer, Frases incompletas de Sacks para adultos, Escala de Ansiedad Manifiesta (AMAS-A), Escala de Habilidades Sociales (EHS), Inventario de Depresión Estado/Rasgo (IDER), Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE), Listado de Síntomas Breve (LSB-50), Examen Cognoscitivo MINI-MENTAL, Inventario de Síntomas (SIMS), Escala de Violencia en el trabajo (EVT), en que se encuentra basado el dictamen de fecha tres de junio de dos mil dieciséis, emitido por la licenciada (...), perita en materia de Psicología adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales, Delegación Chihuahua, de la Procuraduría General de la Republica.

Acreditare identidad con IFE.

Atte: (...)." (Sic)

**Otros datos para facilitar su localización:**

"EN: AP/PGR/FEVIMTRA/026/2015

DELEGACION ESTATAL EN CHIHUAHUA, COORDINACION ESTATAL DE SERVICIOS PERICIALES. NUMERO DE FOLIO 3824/2016" (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a:** SCRPPA, SDHPDSC y CGSP.

**PGR/CT/ACDO/0281/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad al evaluar que no existe posibilidad alguna de acreditar la personalidad de la solicitante, **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o no de cualquier información que dé cuenta que la persona aludida en la petición se encuentre inmersa en alguna línea de investigación, ello conforme a lo establecido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de información requerida, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que

actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

*TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
De la Información Confidencial*

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

*I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;*

...

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.*

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:

*TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:*

*I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*

*II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y*

*III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Procuraduría, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:



**CAPÍTULO II**  
**DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

**ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)*

*Décima Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tribunales Colegiados de Circuito*

*160425 1 de 3*

*Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.*



*Tesis Aislada*  
*Novena Época*  
*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*  
*Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.*  
*Tomo: XIV, Septiembre de 2001*  
*Tesis: I.3o.C.244 C*  
*Página: 1309*

*DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.*

*Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.*

*Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.*

*De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.*

*Tesis Aislada*  
*Novena Época*  
*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*  
*Pleno*  
*Tomo: XI, Abril de 2000*  
*Tesis: P. LX/2000*  
*Página: 74*

*DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal*

*no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.*

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

*ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.*

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

*ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.*

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

*ARTÍCULO 17.*

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

*ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

*B. De los derechos de toda persona imputada:*

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

*ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia*

*Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.*

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

Por otro lado, a fin de dar atención a la otra parte del requerimiento donde la particular solicita exámenes y/o tests y/o baterías, este Órgano Colegiado **confirma** la clasificación de esa documentación de manera general, sin individualizarlo a un caso en específico; lo anterior, atendiendo lo previsto en el artículo 110, fracción VIII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. El difundir la información contenida en los exámenes, tests y/o baterías utilizadas por los peritos, ocasionaría un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que se pondrían en riesgo las actividades que llevan a cabo, ya que los mismos representan un instrumento de carácter exclusivamente técnico y una herramienta que sirve de apoyo al personal pericial para evaluar y emitir dictámenes que coadyuvan a las actividades de investigación y persecución de delitos.
- II. Divulgar la información contenida que obra dentro de las exámenes, tests y/o baterías aludidas por la solicitante, causaría un serio perjuicio a la Institución y a los mismos procesos de dictaminación, ya que se estarían otorgando elementos que pueden disminuir la efectividad de las mismas pruebas, máxime que las preguntas, reactivos y opciones de respuesta empleadas en los procesos de evaluación son reutilizables para otros casos similares, e incluso, las pruebas ya realizadas por analogía permitirían conocer los reactivos y dar a conocerlas pondría en ventaja a las personas que son sometidas a las mismas y los dictámenes emitidos no serían de utilidad para que el Ministerio Público pueda dar seguimiento a las actividades de investigación.
- III. Resulta necesario reservar los documentos aludidos en la petición, sin que ello signifique un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda vez que se busca evitar un serio perjuicio a la Institución, pues si se otorgaran, -en este caso las baterías-, perturbarían la efectividad de las mismas ya que las personas que sean sometidas a ellas conocerían con anticipación el contenido de las pruebas obteniendo beneficios, sumando que la divulgación de su contenido produciría un daño mayor en detrimento de la procuración de justicia ocasionando así un serio perjuicio a la sociedad; toda vez que se revelarían datos que pudieran ser aprovechados para conocer las pruebas, anticiparse a las respuestas y de esta manera burlar las actividades de investigación.

#### A.4. Folio 0001700103318

##### Contenido de la Solicitud:

*"En la actual plantilla laboral de la dependencia -ya sea sindical o de confianza- cuantas madres de familia (sin proporcionar nombre) trabajan, qué cargo ocupan y qué salario específicamente en el estado de Quintana Roo" (Sic)*

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM, SCRPPA y UTAG.**

**PGR/CT/ACDO/0282/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva respecto del número de madres de familia que se encuentren en el supuesto de personal sustantivo, ya sean policías o peritos o agentes del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el artículo 110, fracción I y V de la LFTAIP, respectivamente, hasta por un periodo de cinco años para policías y dos años para las peritos y agentes del Ministerio Público de la Federación. Lo anterior, toda vez que de revelar dicha información se estarían proporcionando datos sobre la capacidad de reacción del personal sustantivo u operativo; es decir, el que investiga y persigue a los integrantes de la delincuencia organizada, a fin de salvaguardar finalmente la seguridad pública. Con ello, éstos pudieran aprovechar dicha información y vulnerar su actuar, atentando contra su vida, seguridad y salud.

Por lo anterior, a fin de reforzar las citadas clasificaciones, se proporcionan las siguientes pruebas de daño:

##### Artículo 110, fracción I:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al hacer del dominio público el número de policías (en el caso que nos ocupa de las que son madres) con las que cuenta la Delegación de Quintana Roo, implicaría revelar parte medular del estado de fuerza de esa Delegación; es decir, la cantidad de personal sustantivo (operativo) que posee para combatir a la delincuencia organizada, vulnerando así su capacidad de despliegue y operación, además del destino final de su propósito. En consecuencia, al realizar una analogía de dicha información por parte de los miembros de la delincuencia organizada, esa Delegación quedaría expuesta, ya que la difusión de la misma permitiría conocer las estrategias de despliegue adoptadas institucionalmente para velar por la seguridad pública a través de la investigación y persecución de los delitos federales.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que en virtud de las actuales condiciones que operan en el país, hacer del conocimiento público dicha información atentaría directamente en las labores implementadas para el combate a la delincuencia organizada, poniendo en riesgo y peligro la capacidad de reacción y de fuerza de esta



Institución, en función de que al proporcionar la información inherente al número de policías de investigación, implicaría no sólo revelar la capacidad de reacción de esta institución, sino un claro perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad, por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad, garantizar el derecho a la seguridad pública, sobre su interés particular de conocer la información solicitada.

- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar lo requerido no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al garantizar que se evite un perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos a través de la protección de la información relacionada con el estado de fuerza de esta Procuraduría y así, pueda cumplir con sus atribuciones para la procuración de una justicia federal, eficaz y eficiente apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas Leyes y Tratados Internacionales.

Artículo 110, fracción V:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al divulgar la información solicitada permitiría identificar el número de personal sustantivo, en específico Agentes del Ministerio Público de la Federación y Peritos (en el caso que nos ocupa de las que son madres), materializándose en graves riesgos para dicho personal, en su vida, seguridad y salud, toda vez que al conocer la cantidad de la que se componen, podría ser aprovechado por los miembros de la delincuencia organizada, superando en cantidad dichos elementos, haciéndolos susceptibles de posibles ataques, mediante acciones de violencia física, vulnerando así el desempeño de sus funciones dentro de esta Institución, y más importante aún, vulnerando la vida, la seguridad y la salud de dicho personal.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que dar a conocer la información requerida, pondría en riesgo la vida, seguridad y salud de las servidoras públicas, materializándose en acciones en su contra que perjudiquen las labores inherentes a su cargo dentro de esta Procuraduría General de la República, institución cuya función principal consiste en la investigación y persecución de los delitos del orden federal.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, este supuesto se justifica debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar una afectación a las servidoras públicas. En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de salvaguardar los derechos humanos referidos con antelación, y previstos en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. -----
-

**A.5. Folio 0001700105318**

**Contenido de la Solicitud:**

*"Solicito en versión pública documento que contenga el numero de policías investigadores a cargo de cada uno de los fiscales de la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión." (Sic)*

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SDHPDSC y PFM.**

**PGR/CT/ACDO/0283/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva del número de policías adscritos a la unidad administrativa señalada en la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción I de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años. Por lo que a fin de reforzar la citada clasificación, se emite la siguiente prueba de daño:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al hacer del dominio público el número de policías con los que cuenta la FEADLE, implicaría revelar el estado de fuerza de esa Fiscalía; es decir, la cantidad de personal sustantivo (operativo) que posee para combatir a la delincuencia organizada, vulnerando así su capacidad de despliegue y operación, además del destino final de su propósito. En consecuencia, al realizar una analogía de dicha información por parte de los miembros de la delincuencia organizada, esa Fiscalía quedaría expuesta, ya que la difusión de la misma permite conocer las estrategias de despliegue adoptadas institucionalmente para velar por la seguridad pública a través de la investigación y persecución de los delitos federales.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que en virtud de las actuales condiciones que operan en el país, hacer del conocimiento público dicha información atentaría directamente en las labores implementadas para el combate a la delincuencia organizada, poniendo en riesgo y peligro la capacidad de reacción y de fuerza de esta Institución, en función de que al proporcionar la información inherente al número de policías de investigación, implica no sólo revelar la capacidad de reacción de esta institución, sino un claro perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad, por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad, garantizar el derecho a la seguridad pública, sobre su interés particular de conocer la información solicitada.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar lo requerido no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al garantizar que se evite un perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos a través de la protección de la información relacionada con el estado de fuerza de esta Procuraduría y así, pueda cumplir con sus atribuciones para la procuración de una justicia federal, eficaz y eficiente apegada a los principios de



[illegible]

**A.6. Folio 0001700109318**

**Contenido de la Solicitud:**

*"Del Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Orientador de la Unidad de Atención y Determinación FEVIMTRA en la Ciudad de México, Licenciado SALVADOR JUAN JAYME SÁNCHEZ:*

- 1.- La capacitación recibida en materia de (i) Derechos Humanos; (ii) Derechos Humanos de las Mujeres; (iii) Perspectiva de Género; (iv) Violencia de Género; (v) Investigación con perspectiva de género; (vi) eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres; (vii) Igualdad entre mujeres y hombres; (viii) acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género; (iv) No discriminación. En la que se especifique el (i) tipo de capacitación (curso, taller, seminario, diplomado, etc.), (ii) su duración, (iii) la fecha en que se impartió y (iv) si las mismas fueron o no aprobadas por el funcionario público.*
- 2.- El número de carpetas de investigación a cargo del funcionarios público para su integración entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2017.*
- 3.- El número de carpetas de investigación en las que ejerció su facultad de abstenerse de investigar entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2017.*
- 4.- El número de carpetas de investigación en las que determinó el archivo temporal entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2017.*
- 5.- El número de carpetas de investigación en las que determinó la aplicación de un criterio de oportunidad entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2017.*
- 6.- El número de carpetas de investigación en las que determinó el no ejercicio de la acción penal entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2017.*
- 7.- El número de carpetas de investigación en las que formuló imputación entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2017.*
- 8.- El número de comisiones en la Ciudad de México que le fueron asignadas o participó, en el marco de su actividad de investigación, así como los días. Entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2017.*
- 9.- El número de comisiones fuera de la Ciudad de México que le fueron asignadas o participó, en el marco de su actividad de investigación, así como los días. Entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2017.*

*Se previene que esta solicitud de información no versa sobre números de identificación de las carpetas de investigación, ni tampoco sobre cualquier otro dato para la identificación de indagatorias, víctimas directas o indirectas, presuntos responsables que por ley esté reservada. Sino consulta de información estadística, relativa o similar, respecto a los numerales 2 a 9." (Sic)*

**Otros datos para facilitar su localización:**

*"EL funcionario Público es agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad." (Sic)*

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás**

**disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a:** SDHPDSC, COPLADII y OM.

**PGR/CT/ACDO/0284/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva respecto de cualquier información que haga identificable al personal sustantivo de la Procuraduría General de la República; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años. Por lo que se emite la siguiente prueba de daño:

- I. Que el divulgar información perteneciente a personal sustantivo de esta Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y hacer reconocible para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con la prevención y persecución de delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información del personal sustantivo, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de este sujeto obligado, al hacer públicos datos que permitirían conocer a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

**A.7. Folio 0001700109418**

**Contenido de la Solicitud:**

*"Del Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Orientador de la Unidad de Atención y Determinación FEVIMTRA en la Ciudad de México, Licenciado SALVADOR JUAN JAYME SÁNCHEZ:*

- 1.- La capacitación recibida en materia de (i) Derechos Humanos; (ii) Derechos Humanos de las Mujeres; (iii) Perspectiva de Género; (iv) Violencia de Género; (v) Investigación con perspectiva de género; (vi) eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres; (vii) Igualdad entre mujeres y hombres; (viii) acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género; (iv) No discriminación. En la que se especifique el (i) tipo de capacitación (curso, taller, seminario, diplomado, etc.), (ii) su duración, (iii) la fecha en que se impartió y (iv) si las mismas fueron o no aprobadas por el funcionario público.*
- 2.- El número de carpetas de investigación a cargo del funcionarios público para su integración entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2018.*
- 3.- El número de carpetas de investigación en las que ejerció su facultad de abstenerse de investigar entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2018.*
- 4.- El número de carpetas de investigación en las que determinó el archivo temporal entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2018.*
- 5.- El número de carpetas de investigación en las que determinó la aplicación de un criterio de oportunidad entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2018.*
- 6.- El número de carpetas de investigación en las que determinó el no ejercicio de la acción penal entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2018.*
- 7.- El número de carpetas de investigación en las que formuló imputación entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2018.*
- 8.- El número de comisiones en la Ciudad de México que le fueron asignadas o participó, en el marco de su actividad de investigación, así como los días. Entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2018.*
- 9.- El número de comisiones fuera de la Ciudad de México que le fueron asignadas o participó, en el marco de su actividad de investigación, así como los días. Entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2018.*

*Se previene que esta solicitud de información no versa sobre números de identificación de las carpetas de investigación, ni tampoco sobre cualquier otro dato para la identificación de indagatorias, víctimas directas o indirectas, presuntos responsables que por ley esté reservada. Sino consulta de información estadística, relativa o similar, respecto a los numerales 2 a 9."*  
(Sic)

**Otros datos para facilitar su localización:**

*"El funcionario publico es agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad."*  
(Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16**



**publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a:** SDHPDSC, COPLADII y OM.

**PGR/CT/ACDO/0285/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva respecto de cualquier información que haga identificable al personal sustantivo de la Procuraduría General de la República; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, hasta por periodo de cinco años. Por lo que se emite la siguiente prueba de daño:

- I. Que el divulgar información perteneciente a personal sustantivo de esta Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y hacer reconocible para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con la prevención y persecución de delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información del personal sustantivo, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de este sujeto obligado, al hacer públicos datos que permitirían conocer a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa al personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

**A.8. Folio 0001700116018**

**Contenido de la Solicitud:**


*"Solicitado en versión pública documento que contenga el numero de policías investigadores que estuvo a cargo de cada uno de los Ministerios Públicos de la Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas (FEADP), creada por medio del acuerdo A/031/06 de la Procuraduría General de la República, del 16 de febrero de 2006 a junio de 2010." (Sic)*

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SDHPDSC y PFM.**

**PGR/CT/ACDO/0286/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva respecto del número de policías investigadores que estuvieron dentro de la Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción I de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años. Por lo que a fin de reforzar la citada clasificación se emite la siguiente prueba de daño:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al hacer del dominio público el número de policías con los que contó la FEADP, implicaría por medio de la progresión antitética revelar el estado de fuerza con el que cuenta ahora la FEADLE; es decir, la cantidad de personal sustantivo (operativo) que posee para combatir a la delincuencia organizada, vulnerando así su capacidad de despliegue y operación, además del destino final de su propósito. En consecuencia, al realizar una analogía de dicha información por parte de los miembros de la delincuencia organizada, esa Fiscalía quedaría expuesta, ya que la difusión de la misma permite conocer las estrategias de despliegue adoptadas institucionalmente para velar por la seguridad pública a través de la investigación y persecución de los delitos federales.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que en virtud de las actuales condiciones que operan en el país, hacer del conocimiento público dicha información atentaría directamente en las labores implementadas para el combate a la delincuencia organizada, poniendo en riesgo y peligro la capacidad de reacción y de fuerza de esta Institución, en función de que al proporcionar la información inherente al número de policías de investigación, implica no sólo revelar la capacidad de reacción de esta institución, sino un claro perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad, por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad, garantizar el derecho a la seguridad pública, sobre su interés particular de conocer la información solicitada.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar lo requerido no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al garantizar que se evite un perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos a través de la protección de la información relacionada con el estado de



[illegible]

**A.9. Folio 0001700121018**

**Contenido de la Solicitud:**

*"Cuántos peritos están contratados al día de hoy?" (Sic)*

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a:** CGSP y UTAG.

**PGR/CT/ACDO/0287/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva del número de peritos con los que cuenta esta Institución Federal, de conformidad con la fracción V del artículo 110 de la LFTAIP, hasta por un periodo de dos años. Por lo que a fin de reforzar la citada clasificación, se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable. La divulgación de la información solicitada, permitiría identificar el número de personal sustantivo, en específico Peritos, propiciando la materialización de graves riesgos para dicho personal, en su vida, seguridad y salud, toda vez que al conocer el número total, en algún suceso podrían elementos de la delincuencia organizada superar en cantidad dichos elementos, haciéndolos susceptibles de posibles ataques, mediante acciones de violencia física, vulnerando así el desempeño de sus funciones dentro de esta Institución, y más importante aun vulnerando la vida de dicho personal.

En ese contexto, se ocasionaría un serio perjuicio en los derechos humanos antes mencionados, por lo que dicha difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados, de igual manera, al dar a conocer públicamente lo petitionado, podría ocasionar un detrimento en las funciones desempeñadas, causándose una obstrucción y menoscabo de dichas funciones.

- II. Perjuicio que supera el interés público: Dar a conocer la información requerida, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de los servidores públicos en comento, así como la de sus familiares, materializándose acciones en su contra que perjudiquen las labores inherentes a su cargo dentro de esta Procuraduría General de la República, institución cuya función principal consiste en la investigación y persecución de los delitos del orden federal.
- III. Principio de proporcionalidad. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio, este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio de los servidores públicos. En tal virtud, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de salvaguardar

La reserva antes manifestada obedece a la obligación consistente en proteger la vida, seguridad y en su caso la salud de tales personas físicas en virtud de las funciones que realizan.

**A.10. Folio 0001700124718**

**Contenido de la Solicitud:**

"(...)...

*En ejercicio de mi derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar se me informe lo siguiente:*

*Si existe alguna investigación o se haya abierto una carpeta en la cual el suscrito aparezca como investigado, indiciado, inculcado o imputado por la comisión de algún delito en cualquier modalidad de participación, ya sea de competencia del fuero común o federal..." (Sic)*

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.**

**PGR/CT/ACDO/0288/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo respecto de la existencia o inexistencia de alguna indagatoria o línea de investigación en contra del solicitante; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la

importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No



obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos



sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera

jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querrela contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación. - - - - -

**A.11. Folio 0001700124818**

**Contenido de la Solicitud:**

*"(...), promoviendo el presente recurso, en mi carácter de apoderado legal de (...),...*

*... 1.- Se me informe si existen dentro de sus archivos alguna imputación, carpeta de investigación, acta circunstanciada o cualquier línea de investigación en la que mi representado aparezca como indiciado y/o investigado, y/o señalado por alguna persona en carpeta de investigación tendiente a incriminarme.*

*Y ante su existencia me sea informado de manera expresa, clara, integral y suficientemente detallada los hechos que se me atribuyen como posiblemente constitutivos de delitos dentro de la indagatoria de referencia.*

*Y sólo una vez que se haya hecho de mi conocimiento los hechos a los que hago referencia en el párrafo inmediato anterior, sirva citarme para declarar sobre los hechos que se investigan, ante Usted, el día y hora que señale con el objeto de que en ese acto comparezca a dar respuesta a las imputaciones que se le atribuyen a mi poderdante y ofrecer las pruebas que sean conducentes para acreditar que siempre he actuado dentro del marco legal..." (Sic)*

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.**

**PGR/CT/ACDO/0289/2018:** En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo respecto de la existencia o inexistencia de alguna indagatoria o línea de investigación en contra del solicitante; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la

República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.

- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información petitionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información petitionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares



satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016.



Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa

se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación. - - - - -

**B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de termino para dar respuesta a la información requerida:**

**PGR/CT/ACDO/0290/2018:** Los miembros del Comité de Transparencia determinaron autorizar la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP. Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, para estar en posibilidad de determinar, en cada caso la publicidad, clasificación o inexistencia de la respuesta a los siguientes folios:

**B.1. Folio 0001700108718**

**B.2. Folio 0001700108918**

**B.3. Folio 0001700109018**

**B.4. Folio 0001700109618**

**B.5. Folio 0001700109818**

**B.6. Folio 0001700110618**

**B.7. Folio 0001700110818**

**B.8. Folio 0001700110918**

**B.9. Folio 0001700111218**

**B.10. Folio 0001700111818**

**B.11. Folio 0001700111918**

**B.12. Folio 0001700112018**

**B.13. Folio 0001700112118**

**B.14. Folio 0001700112218**

**B.15. Folio 0001700112318**

**B.16. Folio 0001700112418**

**B.17. Folio 0001700112518**

**B.18. Folio 0001700112618**

**B.19. Folio 0001700112718**

**B.20. Folio 0001700112818**

**B.21. Folio 0001700112918**

**B.22. Folio 0001700113018**

**B.23. Folio 0001700113118**

**B.24. Folio 0001700113318**

**B.25. Folio 1700100016418 – Agencia de Investigación Criminal**

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.

### C. Asuntos Generales

### Punto 1.

El Director de Acceso a la Información insistió a los enlaces en materia de transparencia, para que coadyuven en la detección oportuna y atención eficaz de las solicitudes de potencial riesgo y/o de atención prioritaria; es decir, aquellas que por su naturaleza y alcance puedan generar un impacto mediático a la Institución, y de la información susceptible de ser pública, para que se analicen de ser el caso incluso con el apoyo del Comité de Transparencia.

Asimismo, invitó a los Enlaces de Transparencia a que pudieran identificar y gestionar al interior de las unidades administrativas que representan, la atención oportuna e inmediata cuando así se requiera a efecto de evitar se prorroguen solicitudes de forma innecesaria, recalcando que únicamente era comprensible solicitar una prórroga para otorgar respuesta cuando por la complejidad en la solicitud y búsqueda de información así lo requiriera.

## Punto 2.

Con la finalidad de cumplimentar con el compromiso de promover la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados e información bajo el principio de máxima publicidad la Presidenta del Comité de Transparencia hizo un atento recordatorio a los Enlaces de Transparencia de todas las unidades administrativas a que de ser el caso, remitan a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental a más tardar el próximo 4 de mayo del presente año, un listado de aquellos expedientes que actualmente se encuentran clasificados como reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que consideren deben desclasificarse, como ya se citó con el fin de promover las prácticas de máxima publicidad.

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.



Siendo las 12:45 horas del mismo día, se dio por terminada la Décima Sexta Sesión Ordinaria del año 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

#### INTEGRANTES



**Lcda. Adi Loza Barrera.**

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y  
Presidenta del Comité de Transparencia.



**Lic. Luis Grijalva Torrero.**

Titular del Órgano Interno de Control



**Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.**

Suplente del Director General de Recursos Materiales y  
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora  
de Archivos de la Dependencia.



**Lcda. Gabriela Santillán García.**

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Elaboró**



**Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.**

Director de Acceso a la Información  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Vo. Bo.**